

Sobrevivir sin gobernar

El caso de la Venezuela de Chávez

Alfredo Ramos Jiménez

A partir de una aproximación sintomática y comparativa se aborda la experiencia venezolana de años recientes como una situación de desgobierno que ha provocado unos cuantos desencuentros y desarreglos de los principales actores. En este análisis procederemos a una evaluación de aquellos hechos y realidades que en la proposición de Juan J. Linz configuran una situación de quiebre de la democracia, con el fin de determinar las características básicas de la política del chavismo en el poder. Política que se inició con una ruptura plebiscitaria, diseñando un proyecto político que hoy en día se mueve entre el autoritarismo y el desgobierno.

La respuesta de la sociedad a la política de sus gobernantes no es obviamente la misma que la de un observador experto objetivo, y el éxito de un gobernante puede basarse más en convencer a la sociedad de que los objetivos perseguidos son en el interés de la misma, que en el hecho mismo de que lo sean

Juan J. Linz, La quiebra de las democracias

Si hasta hace poco el «experimento chavista» era visto con gran interés por el resto de los países latinoamericanos, los desarrollos recientes despiertan no solo el escepticismo sino la perplejidad entre los observadores del

Alfredo Ramos Jiménez: profesor titular de la Universidad de Los Andes; director del Centro de Investigaciones de Política Comparada-Cipcom, Mérida; @: <alfredoramosj@hotmail.com>.

Palabras clave: democratización, autoritarismo, desgobierno, Chávez, Venezuela.

Nota: Este análisis forma parte de un proyecto de investigación que adelantamos en el Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Universidad de Los Andes, Venezuela.

fenómeno. En estas notas me propongo someter tal experimento, autoproclamado «revolucionario» por sus principales actores, a un análisis fundado en aquellos datos de la realidad que según Juan J. Linz configuran una situación de «quiebra de la democracia»¹.

La cuestión resulta significativa para quienes desde diversas perspectivas se han detenido en la teorización sobre las posibilidades y viabilidad de la democratización en el conjunto de los países latinoamericanos². En tal sentido, no deja de ser paradójico que las dos experiencias latinoamericanas que en el *fin-de siècle* se habían propuesto llevar a la práctica la idea –más abstracta que real– de una «democracia participativa» como «fase superior» de una democracia representativa inconclusa, sean consideradas hoy en día portadoras de promesas incumplidas y desengaños manifiestos, que alientan en la población actitudes antidemocráticas proclives al autoritarismo. Me refiero a la década fujimorista en Perú y a lo que ha dado en llamarse la «época de Chávez» en Venezuela, en tanto experiencias que arrancaron con el empuje de grandes expectativas de cambio entre los ciudadanos, y cuyos líderes gozaron de una popularidad amplia y suficiente para acometer la tarea de desmantelar la vieja institucionalidad, sin que por ello se haya progresado en reformas institucionales efectivas y duraderas que vayan más allá de la permanencia de esos líderes en el Gobierno³.

1. En su libro clásico *La quiebra de las democracias* (Alianza, Madrid, 1987), Linz se propuso realizar un estudio comparativo y sistemático con el objetivo específico de «construir un modelo descriptivo de los procesos operativos en un cambio de régimen y quizá, en última instancia, un modelo que pudiera explicarlos», a fin de determinar «hasta qué punto los distintos participantes, especialmente los líderes democráticos, tenían o no conciencia del peligro en que se encontraba el sistema en momentos críticos antes del derrumbamiento final» (p. 13). Desde su publicación original este texto ha tenido para los investigadores un valor predictivo excepcional en la ciencia política contemporánea –más caracterizada por el tipo de análisis *ex post*.

2. Desde los trabajos pioneros de Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead sobre las transiciones postautoritarias, el tema de la democratización latinoamericana ha sido objeto de unas cuantas observaciones y revisiones. Véase G. O'Donnell et al. (eds.): *Transitions from America and Transitions from Comparative Perspectives*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986; L. Whitehead: *Democratization. Theory and Experience*, Oxford University Press, Oxford, 2002; Manuel Antonio Garretón: *Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones*, FCE, Santiago, 1995; Alfredo Ramos Jiménez, *Las formas modernas de la política. Estudio sobre la democratización de América Latina*, Cipcom, Mérida, 1997; Larry Diamond y Marc F. Plattner (comps.): *El resurgimiento global de la democracia*, UNAM, México, 1996; Lisa Anderson (ed.): *Transitions to Democracy*, Columbia University Press, Nueva York, 1999.

3. Me he ocupado de la naturaleza del liderazgo plebiscitario de Hugo Chávez en perspectiva comparada en un trabajo colectivo reciente. Véase A. Ramos Jiménez (ed.): *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*, Cipcom, Mérida, 2002. Desde una perspectiva que asigna prioridad a factores socioeconómicos, v. Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.): *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*, Nueva Sociedad, Caracas, 2003. Para un enfoque más coyuntural, que incorpora pautas electorales, v. José Vicente Carrasqueño, Thais Maingon y Friedrich Welsch (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*, RedPol / CDB

La ruptura plebiscitaria

Desde el fracasado golpe de Estado de abril de 2002, la experiencia de Chávez y del chavismo en el poder puede tipificarse dentro de la conocida hipótesis de Linz que reúne el conjunto de factores que preceden la caída de todo régimen democrático como la etapa de desmantelamiento institucional del viejo régimen bipartidista, lo que da paso a una situación caracterizada por la polarización social y la inestabilidad política. En tal sentido, la ruptura plebiscitaria –que arranca en enero de 1999 con el ascenso de Chávez y su movimiento al poder, desplazando definitivamente al tradicional bipartidismo– venía marcada por una evidente vocación autoritaria de un líder que, a diferencia de Alberto Fujimori, contaba con los medios y recursos para hacerse de la dirección y control de un genuino séquito weberiano. Ello le permitiría al gobierno del presidente plebiscitario una relativa estabilidad que contrasta con la conmoción que provocó el fenómeno en la vieja clase política venezolana, la misma que se había ido formando y mantenido en el poder por algo más de 40 años⁴. La ruptura de Chávez y del chavismo con la tradicional democracia de partidos comprende, en primer lugar, la muy extendida ilusión de un «nuevo comienzo», con la que paradójicamente se identificaban tanto los desencantados de la partidocracia como el electorado cautivo que veía en Chávez la encarnación de la reivindicación popular contra las elites, ilusión que habría de desembocar en la así llamada Constitución Bolivariana, aprobada vía referéndum en diciembre de 1999. Ya hemos visto hasta qué punto podía preverse, entonces, un desenlace cercano lleno de contradicciones básicas y ruidosas deserciones, provocando en el chavismo original actitudes integristas y radicales que a partir de una ética excluyente se presentaban como portadoras de un «gran rechazo» del pasado. Todo ello con un marcado acento fundamentalista que, apoyándose en una pretendida superioridad

Publicaciones, Caracas, 2001. Un texto más orientado al estudio del impacto social de los cambios institucionales es el de Marisa Ramos Rollón (ed.): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002. Y, deteniéndose en aspectos político-constitucionales del proceso chavista, tenemos la obra de Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau: *Cambio político y proceso constituyente en Venezuela (1998-2000)*, Vadell Hermanos, Valencia, 2001.

4. En contraste con la experiencia peruana de los años 90, cuando el poder de Fujimori se constituyó en un auténtico «partido militar», en Venezuela el chavismo llegó a representar –no sin grandes dificultades– la alternativa «civil-militar» representativa del nuevo régimen. De este modo, la rápida identificación de este régimen con la personalidad y proyecto de su líder reúne todas las características de aquello que Max Weber definió como «movimiento mesiánico y carismático» expresado en forma de *séquito*, es decir, un conjunto de seguidores incondicionales que atribuyen a su líder bien determinadas cualidades, situación que se produciría siempre bajo condiciones de excepcionalidad. El dictador plebiscitario, según Weber, «arrastra con él a las masas, mediante la maquinaria, y considera a los parlamentarios como simples prebendados políticos añadidos a su séquito». Cf. *El político y el científico*, Coyoacán, México, 2001, p. 48.

moral del movimiento, pronto entraría en conflicto con la cultura democrática que identificaba a amplios sectores sociales y que, por lo mismo, estaba firmemente enraizada en la estructura social⁵. Y es que el movimiento chavista se extendía más allá del partido (Movimiento V República, MVR) creado para la competición electoral de 1998, dejando siempre entrever una concepción militarista de la política que incomodaba a unos cuantos recién llegados –de izquierda y de derecha confundidos– integrados en el movimiento. Tal concepción se apreciaba particularmente en la novedosa tesis «revolucionaria» según la cual el éxito de la empresa común venía ligada con la unidad eventual entre «caudillo, ejército y pueblo»⁶.

En segundo lugar, esa ruptura abarca toda una política de «superoferta» que ciertamente ha venido identificando, en unos cuantos países latinoamericanos, una suerte de irresponsabilidad neopopulista, la misma que afincándose en el alargamiento de las promesas electorales y en la demagogia presidencial de los primeros años de gobierno ha sido la causa recurrente de unas cuantas crisis e inestabilidades. Esa política hace entrar en contradicción la esperanza que genera la promesa neopopulista en la población y lo poco que entrega en la práctica. En el caso de Venezuela, debido a la extendida presión popular por una política de cambios profundos, que responde en un primer momento a proyectos desmesurados e inviables del liderazgo plebiscitario, el desgaste de la popularidad gubernamental ya era evidente en los meses que precedieron al golpe de abril⁷. Desde entonces, las idas y venidas de un gobierno acorralado y carente de metas están en el origen, por una parte, de la creciente polarización social, expresada en las movilizaciones de calle de una sociedad civil que iba abandonando las posiciones antipolíticas del pasado reciente, y por otra de las tensiones institucionales que resultan de la inestabilidad política.

5. Cf. A. Ramos Jiménez: «Los límites del liderazgo plebiscitario. El fenómeno Chávez en perspectiva comparada», en A. Ramos Jiménez: *La transición venezolana...*, cit., pp. 20-24.

6. El sociólogo argentino con claras influencias del neonazismo Norberto Ceresole, especializado en temas militares y geopolíticos, convertido en asesor de la primera hora chavista, parece no haber dejado nada al margen en uno de sus principales consejos al nuevo presidente. Así, deteniéndose en el triunfo electoral de Chávez y en un párrafo que no tiene desperdicio, afirmaría: «La orden que emite el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 1998 es clara y terminante. Una persona física, y no una idea abstracta o un 'partido' genérico, fue 'delegada' por ese pueblo para ejercer el poder, la orden popular definió ese poder físico y personal». Citado en Alberto Garrido: *Mi amigo Chávez. Conversaciones con Norberto Ceresole*, Edcs. del autor, Mérida, 2001, p. 8. Según Garrido, Ceresole había asesorado antes a Juan Velasco Alvarado, a Roberto Viola y a altos jefes militares argentinos y brasileños.

7. Sobre el «golpe de abril» se han dado diversas versiones desde las perspectivas del Gobierno o de la oposición. Un análisis más centrado en la excepcionalidad de la crisis lo encontramos en Juan Carlos Rey: «Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado» en *Revista Venezolana de Ciencia Política* N° 21, 1-6/2002, pp. 9-34.

En fin, el pluralismo centrífugo, producto de las relaciones de fuerza que fueron configurándose a partir del ascenso de Chávez al poder, habría favorecido con el tiempo la conformación de una amplia y creciente oposición bilateral, marcando así la principal línea de ruptura con el pasado. Ello en un contexto de *pluripartidismo polarizado*, predominante en los últimos tres años, que se mueve en torno de dos grandes coaliciones integradoras de partidos provenientes de diversas familias políticas, dejando atrás el tradicional clivaje derecha/izquierda⁸. De ahí que resulte muy difícil abordar la experiencia venezolana reciente, tanto más cuanto en tales coaliciones –del Gobierno y la oposición– pueden identificarse neta e indistintamente grandes y pequeños partidos de la vieja y nueva derecha, de la vieja y nueva izquierda⁹.

Entre el autoritarismo y el desgobierno

A partir de la crisis de abril de 2002, la vacilante y ambigua acción gubernamental chavista, fuertemente orientada hacia la supervivencia política, obedecía al hecho de que el «nuevo régimen» había perdido buena parte de la popularidad de sus orígenes¹⁰. De modo que la movilización de «la masa popular que sigue a su líder», un tanto disminuida para entonces, seguía representando la prioridad del movimiento, ubicándose muy por encima de la acción gubernamental. Ni bueno ni malo, el régimen del chavismo se insta-

8. Me apoyo en una propuesta sistemática adelantada en mi libro *Los partidos políticos latinoamericanos. Un estudio comparativo*, Cipcom, Mérida, 2001, pp. 320-321. Se trata de una adaptación al contexto latinoamericano de la conocida tipología de Giovanni Sartori. V., de ese autor: *Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis*, Alianza, Madrid, 1980. Sobre los partidos políticos venezolanos, véase A. Ramos Jiménez: «Partidos y sistemas de partidos en Venezuela», en Marcelo Cavarozzi y Juan Abal Medina (h.) (comps.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, Fundación Konrad Adenauer / HomoSapiens, Rosario (Argentina), 2002, pp. 381-409.

9. Si bien es cierto que la competición partidista resulta centrífuga en más de un sentido, la misma promueve las convergencias centrípetas en el seno de las dos grandes coaliciones. Este hecho puede corroborarse con el estricto alineamiento de las mismas con motivo de la activación del referéndum revocatorio presidencial, cuando las posiciones extremistas de lado y lado resultaron neutralizadas.

10. De acuerdo con un estudio realizado por el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad, organismo especializado en la medición del desempeño de los gobernantes y de las instituciones desde el punto de vista de la ciudadanía, en marzo de 2003 la popularidad de Chávez alcanzaba un magro 25%, cuando unos pocos meses antes se ubicaba por encima del 50%. Esto no sería tan sorprendente si no fuera porque en su primer año de gobierno la popularidad del presidente había alcanzado el 91%, hecho sin precedentes en la historia de la democracia venezolana. Con ese descenso de su popularidad, Chávez compartía el nivel más bajo de apoyo popular con los presidentes Lucio Gutiérrez (25%) de Ecuador, Enrique Bolaños (22%) de Nicaragua, Mireya Moscoso (16%) de Panamá y Alejandro Toledo (6%) de Perú. Paradójicamente, aquellas instituciones que habían sido objeto de la invectiva y condena presidenciales se ubicaban entre las que mayor confianza despertaban entre los ciudadanos: la Iglesia (67%), los medios de comunicación, incluyendo la televisión privada (57%), la empresa privada (54%) y la educación privada (53%). En contraste, las instituciones que gozaban del favor presidencial se ubicaban muy por debajo: las Fuerzas Armadas (34%), el sistema judicial (30%) y la Asamblea Nacional (27%). Ello traduce a las claras el creciente rechazo a la acción gubernamental. V. *El Universal*, 4/7/04, p. 1-12.

la desde entonces como *desgobierno*, en el sentido de que las tareas del Gobierno son desplazadas y sustituidas por acciones y decisiones encaminadas a la preservación de las posiciones de poder legítimamente adquiridas: en otras palabras, el titular del Gobierno y sus colaboradores dejan de gobernar a fin de mantenerse en el poder¹¹. Si bien es cierto que en los sistemas políticos latinoamericanos este fenómeno resulta nuevo en más de un sentido, el mismo se manifiesta *mutatis mutandis* en las experiencias gubernamentales recientes en los cinco países andinos: con Álvaro Uribe en Colombia, Gutiérrez en Ecuador, Toledo en Perú, Carlos Mesa en Bolivia y, en fin, Chávez en Venezuela. Curiosamente, en los cinco casos de la América andina, el surgimiento de modelos de gobierno autoritario bajo condiciones de legitimación democrática favorece lo que aquí hemos denominado situación de *desgobierno*. Refiriéndose a tales experiencias, José Sánchez-Parga ha observado que:

El modelo autoritario de gobierno podría entenderse como la fase terminal de lo que hemos conceptualizado como la *desconsolidación democrática* de los años 90 y el inicio de un nuevo periodo de *democracias autoritarias*. Ya que si las democracias de los años 90 resistieron la implementación de políticas gubernamentales tan 'oligárquicas', excluyentes y empobrecedoras, el desgaste y deslegitimación consiguientes de la institucionalidad democrática propician las democracias gobernadas con autoritarismos de escalas y violencias muy variables, y hasta formas políticas muy diferentes dependiendo de las condiciones de cada país.¹²

En efecto, la inclinación hacia formas autoritarias de nuevo tipo resulta evidente en la experiencia reciente de tales países si tomamos en cuenta que en casi todos los casos, grandes dificultades –principalmente políticas y económicas– provocaron reacciones autoritarias como la militarización de las policías y la justicia penal, lo que parecía reservado a las recurrentes dictaduras de la época precedente, con parlamentos subalternos y desprestigiados ante la opinión pública. De este modo en los cinco países andinos las diversas políticas de ajuste neoliberal y el creciente empobrecimiento de la masa de excluidos abonaron el terreno para el ascenso al poder de líderes carismáticos y plebiscitarios, que no deben confundirse con los candidatos antipolíticos o extrapartido de la década anterior. Habitados a mandar más que a gobernar, los militares que acceden al Gobierno en los años recientes (Bánzer, Chávez y Gutiérrez) se mueven con frecuencia entre el autoritarismo y el *desgobierno*¹³.

Si admitimos que el comportamiento democrático de un gobierno significa sobre todo el respeto a la autoridad de la ley, su orientación autoritaria casi

11. En la ciencia política de nuestros días, la tesis del *desgobierno* se inscribe dentro de una teoría de la *gobernanza* que precisa todo régimen democrático. En tal sentido, esa tesis tiende a complementar, si no a superar, el ya clásico debate europeo-norteamericano sobre la gobernabilidad/ingobernabilidad de las democracias.

12. «De la desconsolidación al autoritarismo democráticos. O cómo dejar de gobernar para mantenerse en el Gobierno» en *Ecuador Debate* N° 58, 4/2003, p. 18.

siempre se manifiesta en forma de una trasgresión continua, cometida abiertamente e ignorando los límites de sus funciones: los gobiernos mismos se encargan, sea de la creación de leyes (cuentan con el control del Poder Legislativo), o de su aplicación, interpretación o resolución (por el sistema de justicia). Porque en este tipo de regímenes los presidentes violan el principio democrático esencial de la separación constitucional de los poderes públicos cuando ignoran ciertas decisiones del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia que no los favorecen¹⁴.

En el caso de Venezuela, la movilización desestabilizadora de la oposición antichavista, cuyo punto culminante lo encontramos en el paro petrolero de diciembre de 2003-enero de 2004, debe considerarse como la respuesta social a la deriva autoritaria del desgobierno de Chávez, en momentos en que éste incorpora en su proyecto medidas y decisiones de corte arbitrario (designación incoherente de sus colaboradores, solidaridad automática con aquellos que aparecen incurso en escándalos de corrupción, abandono de la prometeda descentralización administrativa), que lo van alejando significativamente de la política democrática. Así, en este nuevo contexto, que se extiende hasta los días de la activación del referéndum revocatorio presidencial en 2004, caracterizado por la búsqueda de una hegemonía aparentemente perdida, la acción oficial se expresa en decisiones y acciones solo coherentes con el objetivo específico de mantener el *statu quo*, lo que precipita la voluntad política unificadora de una oposición dispuesta a acabar de una vez con la experiencia del chavismo en el poder. De aquí que la violencia del neautoritarismo venezolano se haya concentrado en acciones represivas puntuales no rutinarias –incluyendo la presencia de grupos civiles armados con apoyo oficial–, defensivas en más de un sentido, dejando sin control la violencia privada que se expresa en una alta criminalidad y delincuencia.

Los dos años comprendidos entre la crisis de abril de 2002 y la activación del referéndum revocatorio (mayo de 2004) corresponden a una etapa que en

13. *Ibíd.*, p. 24. En un texto reciente, la investigadora norteamericana Marina Ottaway se detiene en el estudio comparado de los gobiernos de Egipto, Azerbaijón, Croacia, Venezuela y Senegal, para lo que utiliza la categoría de «regímenes semi-autoritarios». La autora sostiene que tales gobiernos no constituyen democracias imperfectas ni gobiernos de transición a la democracia, sino *híbridos*, que no permiten la creación de condiciones para el funcionamiento de una genuina política democrática. Trátase de gobiernos organizados y estables que, guardando la forma democrática, ocultan su comportamiento autoritario; v. M. Ottaway: *Democracy Challenged. The Rise of Semi-Authoritarianism*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2003.

14. Cf. Andreas Schedler: «Comment observer la consolidation démocratique?» en *Revue Internationale de Politique Comparée* vol. 8 N° 2, verano de 2001, pp. 230-231. El autor señala al presidente Chávez y al paraguayo Raúl Cubas como los dos casos latinoamericanos proclives a la trasgresión autoritaria.

adelante podría definirse como la situación de desgobierno que precede al definitivo desenlace del experimento chavista. En esta etapa de deslegitimación democrática se va descubriendo la naturaleza autoritaria del proyecto oficialista, que encara los movimientos de protesta con una retórica presidencial que, satanizando a la oposición creciente, invoca paradójicamente la memoria de los luchadores y caudillos rurales de la Venezuela del siglo XIX. De esta forma las decisiones de un desgobierno en aprietos habrían de chocar con las expectativas frustradas de ciudadanos que iban abandonando, al parecer definitivamente, las actitudes antipolíticas del pasado reciente; las mismas que alimentaron el «gran rechazo» que había impulsado al chavismo al poder en 1998. La frustración de tales expectativas está en el origen de las manifestaciones y marchas de una sociedad civil que se había mantenido hasta entonces desmovilizada y al margen de la lucha política. De aquí que, en un primer análisis, cabe plantearse la hipótesis de que la entrada en una fase terminal de una experiencia política innovadora y cargada de promesas ya venía anunciada en unas cuantas características definitorias de un proyecto ambiguo que se asumía más allá de lo estrictamente nacional¹⁵.

La política en la Venezuela realmente existente

Si examinamos las características que se desprenden de los hechos posteriores a la crisis de abril, podríamos avanzar en la exploración de la naturaleza profunda de un proyecto que con el tiempo habría de desembocar en una gran contradicción entre el ideal propuesto dentro de la práctica de una «democracia mínima» estandarizada en nuestros países y aquello que Norberto Bobbio señalara como «la cruda realidad» de la política democrática¹⁶. Desde esta perspectiva, que se inscribe en una aproximación *sintomática* de la cuestión democrática, ciertamente no exenta de referencias normativas, es preciso detenernos en las cuatro características básicas de la política chavista:

1. La política chavista ha sido presa de un «presentismo» que a la larga la ha vuelto irresponsable ante el futuro, porque no de otra forma podría describir-

15. La vocación internacional del proyecto chavista se ha puesto de manifiesto tanto en la promoción continental de la «figura presidencial», incorporada en una concepción alternativa de la revolución, como en la orientación de un autoproclamado modelo democrático-participativo que convocaba a la movilización de la masa de excluidos en todos los países del área. En su tiempo, una tal «revolución» sería presentada y asumida en la retórica presidencial bajo la forma de «revolución pacífica» (contra la tradicional violencia revolucionaria), «revolución bolivariana» (como la seña principal de una identidad excluyente), «revolución bonita» (contra la fealdad bipartidista), finalmente «revolución humanista», al parecer contra el antihumanismo del «capitalismo neoliberal y salvaje». De allí que para los venezolanos no resulte extraño que el jefe de Estado se presente cada vez más como el jefe de una revolución que como presidente de la República.

se una acción gubernamental decididamente volcada hacia lo que, según sus promotores, la gente «debía sentir y esperar» aquí y ahora. De este modo, la defensa del orden «presente» deja sin lugar la planificación democrática del futuro –que incluye a todos los actores involucrados– y reduce la actividad gubernamental a las tareas dirigidas a la preservación de las posiciones de poder amenazadas por una oposición considerada, por principio, desleal. Esto no sería tan decisivo si no fuera porque, como nos lo advirtiera el recientemente desaparecido Norbert Lechner, resulta imperativo combatir el «presentismo» ya que, «al imperio del presente contribuye el desvanecimiento del pasado (...) Y esa pérdida del pasado afecta nuestra imagen del futuro (...) Frente al 'presentismo', es hora de reivindicar el tiempo de la política: la construcción del futuro»¹⁷. En tal sentido, un balance detenido de las realizaciones de la política pública chavista quedaría corto ante la extendida promesa de cambios profundos que animó la movilización del chavismo en sus orígenes y primeros desarrollos. Es en este contexto que deben entenderse las siete sucesivas victorias electorales del régimen en sus tres primeros años, las mismas que dieron base firme para que se pensara en una fuerza indetenible que, acabando con la oposición de todo tipo –partidista o independiente–, se presentaba ante los ciudadanos libre de amenaza real en el corto y largo plazo¹⁸.

2. El carácter «revolucionario» del proyecto chavista estaba reñido con las raíces culturales de corte democrático de un electorado que, si bien vivía el desencanto de la democracia bipartidista, no estaba dispuesto a sacrificar la tradición liberal de la política democrática en Venezuela. En tal sentido, la defensa del orden democrático debe siempre estar enmarcada dentro de una legalidad que excluye por principio la excitación de las pasiones populares, y el activismo de ciudadanos que en tales circunstancias se sienten llamados a actuar en defensa del orden. Una política «revolucionaria» que impulsa la confrontación amigo/enemigo desde las posiciones del Gobierno incorpora por principio toda una tradición de violencia revolucionaria que rompe con la relativa paz social que, precisamente en el caso de Venezuela, había resulta-

16. De acuerdo con el conocido texto de Bobbio, esa contradicción resulta patente en todos aquellos proyectos políticos que en las democracias occidentales se han cobijado bajo la falsa promesa de «transformación de la democracia»: «Si se reuniese todo lo que se ha escrito sobre las transformaciones de la democracia», observa, «o sobre la democracia en transformación, se podría llenar una biblioteca». V. *El futuro de la democracia*, FCE, México, 1986, p. 86.

17. Véase «Los desafíos políticos del cambio cultural» en *Nueva Sociedad* N° 184, 3-4/2003, p. 64.

18. Aunque el nivel de abstención se mantuvo siempre muy por encima del 40%, las victorias electorales del chavismo no son en modo alguno desdeñables. De aquí que los 3,4 millones de firmas presentadas por la oposición para la activación del referéndum revocatorio del presidente y el millón de reparos posteriores ponen en cuestión la proclamada y amplia popularidad del «nuevo régimen». Cf. A. Ramos Jiménez: «Los límites del liderazgo plebiscitario...», cit., p. 25.

do crucial para asegurar la estabilidad institucional de las cuatro décadas que precedieron el ascenso del chavismo al poder. La violencia verbal y a veces física presente en el discurso presidencial –dirigido decididamente a la masa empobrecida y marginal– y en la airada respuesta de la oposición, no son otra cosa que lo que Linz definiera como consecuencia negativa de una política de resentimiento impulsada desde las posiciones de poder¹⁹. Asimismo, en una sociedad donde los líderes democráticos han perdido amplias parcelas de poder, la promesa «revolucionaria», que afirma contar con el apoyo mayoritario de las FFAA, conservaba una amplia capacidad de chantaje para desmontar cualquier movimiento de «oposición desleal» contra el «nuevo régimen» y para presentarse como «revolución legal», puesto que contaba con una mayoría suficiente en el Parlamento, que le permitía asumir el poder formal y constitucional.

3. El antipartidismo fundamental del desgobierno, con evidentes connotaciones autocráticas derivadas de una concepción plebiscitaria de la democracia, lo habría conducido hacia un callejón sin salida, puesto que el movimiento chavista, devenido en «partido de gobierno» para la ocasión, reunía en su dirigencia unas cuantas mentalidades abiertamente antidemocráticas que echaron por tierra cualquier «veleidad» partidista o pluralista, identificada a la ligera como contrarrevolucionaria. Ya hemos visto en otra parte la renuencia presidencial a aceptar las discrepancias y disidencias, normales en toda política de partido, y su propensión a descalificar a la oposición considerándola ilegítima. Así que las diferencias de opinión resultaban en todo momento intolerables para el jefe de Gobierno y, por lo mismo, debían ser condenadas por sus seguidores. Las actividades combativas y críticas de la oposición en no pocos casos fueron denunciadas como actos de «traición a la patria»²⁰. De aquí que no extrañe la incapacidad del movimiento para constituirse en partido y, lo que a la larga resultó determinante, su subordinación a la autoridad presidencial.

4. Una cuarta característica es la legitimación de la ilegalidad que resulta de la desaparición de la línea que separa la legalidad de la ilegalidad. Ello traduce las dificultades que encuentra el desgobierno para hacer valer su promesa de erradicar la impunidad y la corrupción. Por lo general, una actitud com-

19. *Ibid.*, pp. 68 y 81. El sociólogo Lewis A. Coser –citado por Linz– señala en qué medida el *ressentiment*, «lleva a una tendencia a degradar, a quitar importancia a valores auténticos, así como a los que los representan. En contraste con la rebelión, el *ressentiment* no lleva a la afirmación de contravalores, ya que personas llenas de *ressentiment* anhelan en secreto los valores que denuncian públicamente». *Ibid.*, p. 82.

20. Bajo la acusación de rebelión contra la autoridad o de colaboración con el extranjero se cuentan 31 detenidos en espera de juicio, y 234 perseguidos políticos incluyendo militares, periodistas, alcaldes, trabajadores petroleros y dirigentes del sector educación. V. *El Universal*, 4/7/04, p. 1-2.

placiente con la corrupción de sus colaboradores inmediatos va extendiéndose a todos los órganos de la política oficial. Las denuncias recurrentes de la oposición, con frecuencia fomentadas por los medios de comunicación, son neutralizadas, sea por la Fiscalía, entendida como complemento orgánico del «gobierno revolucionario», o por el aparato de justicia bajo control del Ejecutivo. Y es que la gobernabilidad democrática asume retos y problemas mucho más difíciles que la gobernabilidad no democrática, en la medida en que la política de la primera resulta más visible para los gobernados gracias a la libertad de crítica y de información que limita la manipulación y la desinformación de los gobiernos autoritarios, siempre propensos a la arbitrariedad. De aquí la desconfianza natural de los ciudadanos hacia la responsabilidad de quienes, habiendo sido elegidos para gobernar democráticamente, dedican la mayor parte de su tiempo a la defensa de las posiciones adquiridas con los recursos del poder²¹.

La política del desgobierno que, como hemos visto más arriba, identifica en nuestros días a unas cuantas experiencias latinoamericanas, debe ser objeto de reflexión y discusión en nuestros países. Porque si bien es cierto que los esfuerzos regionales orientados hacia la democratización han sufrido unos cuantos reveses en los primeros años del nuevo siglo, hoy en día asistimos a un relanzamiento de la sociedad civil en los terrenos de una política democrática revalorizada. Cuestiones tales como la previsión del futuro, el partidismo renovado en condiciones de democratización, el respeto del Estado de Derecho y, en fin, la convivencia democrático-competitiva incluyente, se cuentan entre los factores imprescindibles para superar las hoy recurrentes situaciones de desgobierno que afectan la política que nos ha tocado vivir. Tenemos que concluir señalando que estas consideraciones merecen más y más análisis sistemáticos y comparativos. Para nosotros, latinoamericanos, este constituye uno de los mayores desafíos en el tiempo que corre, y no debemos dejarlo escapar.

Mérida, julio de 2004

21. Desde esta perspectiva deben entenderse tanto la alta discrecionalidad del desgobierno en el uso de los recursos públicos como la política pública desplegada en las diversas «misiones» que en los últimos dos años vinieron a sustituir las políticas sociales de los gobiernos bipartidistas de la década de los 90. Se trata de programas sociales de alto impacto popular: «Misión Robinson» (alfabetización masiva); «Misión Ribas» (educación media); «Misión Sucre» (acceso a la universidad), «Plan Barrio Adentro» (programas de salud y atención médica de los barrios marginales), «Misión Vuelvan Caras» (creación de empleo) y «Misión Piar» (apoyo a la pequeña minería). Curiosamente, todos estos programas se inscriben dentro de una política asistencialista, de innegable cuño populista, que coincide con la campaña adelantada desde la presidencia para impedir el referéndum revocatorio activado para el próximo 15 de agosto o vencer en el mismo. En este contexto, resulta muy indicador el hecho de que en más de cinco años de gobierno no se haya adoptado el muchas veces prometido y siempre aplazado «sistema de seguridad social» que favorecería a la clase trabajadora y a una clase media muy venida a menos en los últimos años.